



• Grupos priístas han cometido violaciones y secuestros; el gobierno estatal no los escucha

Indígenas despojados de sus tierras en Ocosingo cumplen 22 días de plantón

HERMANN BELLINGHAUSEN

Enviado

Periódico La Jornada
Jueves 5 de enero de 2012, p. 13

San Cristóbal de las Casas, Chis. 4 de enero. Violaciones, secuestros de menores y mujeres embarazadas, encarcelamientos con apoyo de las policías estatal y municipal, despojo armado de casas y parcelas, amenazas de muerte. En los ejidos tzeltales Busiljá y Cintalapa, al norte del municipio oficial de Ocosingo, los grupos priístas identificados como paramilitares han llegado demasiado lejos en sus agresiones contra familias que no pertenecen a la Organización Para de Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), con la intención de quitarles las tierras que poseen legalmente.

Hoy adherentes de *la otra campaña*, siete familias de Busiljá, están de plantón en la Plaza de la Paz. Despojadas de sus tierras, no tienen dónde vivir y de momento lo hacen aquí, donde llevan 22 días de protesta, ante la sordera y la indolencia del gobierno estatal. Sus demandas más urgentes son dos. Una, la devolución de la niña Gabriela Sánchez Morales, de 8 años, secuestrada desde el 17 de julio por el grupo paramilitar; se sabe que se encuentra esclavizada en casa de Benjamín Gómez Sánchez, en la misma comunidad. También exigen la liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo), detenido el pasado 7 de diciembre bajo falsos cargos agrarios y preso en el penal 17 de Playas de Catzajá.

Y claro, demandan la devolución de sus tierras, viviendas y propiedades en más de 150 hectáreas, de las cuales cuentan con derecho de propiedad agraria. Aunque las agresiones y desalojos contra familias prozapatistas o al menos opuestas a la Opddic datan de años atrás, en 2011 fueron brutales y constantes.

Entrevistadas por *La Jornada*, las familias expulsadas señalan como principal instigador y violador a Herlindo López Pérez, ex regidor municipal y dirigente de Opddic. Originario del vecino Cintalapa, donde desarrolló una estrecha colaboración con los militares que se establecieron en esa comunidad hacia 1996, ha participado en todas las agresiones en Busiljá, donde existe un destacamento policiaco fijo con el cual colabora estrechamente.

Ésta es la bitácora de Busiljá en 2011: el 15 de enero, los policías ingresaron a sus parcelas en la patrulla 378, amagaron con armas de fuego y los echaron de sus tierras. Ese mismo día desapareció Verónica López Pérez, embarazada de tres meses, y permaneció secuestrada dos meses por el grupo de Opddic. El 5 de abril recuperaron sus tierras y el día 7 entraron la policía, el delegado de Gobierno Caridad Alcázar López, los representantes de la Procuraduría Agraria y la subsecretaria de Gobierno, “y detrás de ellos los priistas, para obligarnos a salir”.

El 21 de abril, la Policía Estatal Preventiva (PEP) violó a Elena Morales Gutiérrez; los ejidatarios sostienen que “por orden del delegado de Gobierno José Manuel Morales Vázquez”.

En las primeras horas del 17 de julio, la PEP, “junto con los paramilitares”, entró a desalojar a los ejidatarios y se llevaron a la niña Gabriela, a quien sus padres consideran desaparecida, y responsabilizan a Herlindo López y Domingo Gutiérrez Hernández, además del mencionado Morales Vázquez. Querían “agarrar” a su padre Nicolás Sánchez Gómez y a su tío Elías, detenido finalmente en diciembre y hoy preso; cabe señalar que ya había estado en prisión anteriormente, y salió libre tras la huelga de hambre de presos políticos de *la otra campaña* en 2008.

El 30 de septiembre, durante una asamblea en Ocosingo, el titular de Obras Públicas del ayuntamiento anunció “que se volvería a agredir a un grupo de 16 familias, 45 personas” en Busiljá. El 2 de octubre, a eso de las 5 horas, cuatro individuos armados irrumpieron en las casas y amenazaron con matar a los perseguidos. El 4 de octubre se repitieron las amenazas. Un día después fue secuestrado en Ocosingo Pablo Sánchez Gutiérrez, de 15 años. El día 11 los paramilitares finalmente expulsaron a 25 personas, blandiendo machetes y armas de alto calibre.

“Quieren nuestras tierras, y los apoyan los políticos”, sostienen los ejidatarios despojados. “El Ministerio Público conoce bien los hechos, las pruebas de los ataques y los nombres de todos los responsables, pero no quiere turnarlos al juez”. Está documentado un caso anterior, en Cintalapa, donde el MP de Ocosingo fue sobornado con 40 mil pesos por el dirigente de Opddic Herlindo López.

Copyright © 1996-2025 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.
Todos los Derechos Reservados.
Derechos de Autor 04-2005-011817321500-203.

Año 41, número 14831, 27 de octubre de 2025, "La Jornada" es una publicación diaria editada por Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México; teléfonos 5591830300 y 5591830400, Fax 5591830356 y 5591830354. Página electrónica del periódico: <https://www.jornada.com.mx> y dirección electrónica: tj@jornada.com.mx. Editor Responsable: María del Carmen Lira Saade. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título número 04-2005-011817321500-203, ISSN 1563-7476, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Lizandro Rodríguez Bárcena, Coordinación de Tecnología y Comunicaciones, con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México; teléfono 5591830300 y 5591830400, fecha de la última modificación: 27 de octubre de 2025. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., ni del editor responsable de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación por cualquier medio, sin previa autorización expresa de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.